

El ALCA, el Plan Colombia y las urgencias de la Casa Blanca

René Báez

El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto promovido por Estados Unidos desde la Cumbre de Miami de 1994, constituye el más reciente capítulo de la doctrina panamericana preconizada por Washington desde los tiempos de James Monroe. En la pos-Guerra Fría, la necesidad estratégica estadounidense de conformar su propio bloque económico (el "área americana") como soporte de su hegemonía político- militar mundial explican el interés de la Casa Blanca por impulsar ese plan unionista. El gobierno de George W. Bush le ha conferido un impulso fundamental al proyecto con la reciente aprobación por el Congreso del texto denominado Autoridad para la Promoción Comercial (TPA o "vía rápida"), ley que le faculta a negociar acuerdos comerciales bilaterales sin el requisito anterior de la mediación parlamentaria. ¿Qué hay detrás de la urgencia de Bush para que el acuerdo integracionista opere a plenitud a partir del cercano 2005? Al parecer, las tres razones siguientes: enjugar la recesión estadounidense, contener la influencia europea en la región y neutralizar políticas proteccionistas al sur del Río Grande y, finalmente, camuflar en las negociaciones económicas el remozado intervencionismo militar norteamericano. Desglosemos estos factores.

El auge de la economía norteamericana durante la era Clinton –el más importante en la posguerra después del "boom" Kennedy-Johnson- colapsó a fines del 2000, envuelto en la debacle de la Nueva Economía. Esta inflexión del ciclo económico norteamericano estuvo signada no solo por la caída de las inversiones sino también por un espectacular descenso de las exportaciones, tendencia que se agudizó en el 2001. En el segundo trimestre de este último año –poco antes del 11-S- las ventas externas de Estados Unidos cayeron el 12%, lo que determinó que la administración republicana enfatizara en la conveniencia de acelerar la conquista de nichos comerciales en América Latina y el Caribe. El segundo motivo tiene que ver con el hecho de que Washington y las corporaciones de EE. UU. no se encontraban precisamente felices con los acuerdos comerciales suscritos por los europeos en el marco de las cumbres iberoamericanas. Igualmente les incomoda una eventual consolidación del MERCOSUR, proyecto de integración que reivindica principios de proteccionismo comercial y financiero. Para desalojar a los intrusos y para que el libre mercado funcione conforme a las prescripciones de Washington, nada mejor que presionar por el ALCA, cuyas bondades para Estados Unidos han sido ampliamente demostradas por el Tratado de Libre Comercio (TLC), convenio en el cual se inspira el instrumento en ciernes. Finalmente, las razones político-militares no son extrañas a la propuesta washingtoniana. El investigador argentino Claudio Katz las expone de modo convincente: "Desde hace varios años una escalada de rebeliones populares conmueve a muchos países de América Latina. Estos movimientos acentúan la erosión de distintos sistemas políticos, que han perdido legitimidad por su incapacidad para satisfacer los reclamos populares. El descreimiento en los regímenes vigentes precipita la interrupción de mandatos (Perú), la disgregación de gobiernos (Ecuador), el colapso de estados (Colombia) y la desintegración de partidos tradicionales (Venezuela, México). A través del ALCA se intenta reforzar la intervención militar encubierta de Estados Unidos en Colombia, el rearme regional asociado a 'lucha contra el narcotráfico', los ejercicios bélicos tipo Vieques y la presión diplomática para alinear a los gobiernos latinoamericanos en sanciones contra los países demonizados por la Casa Blanca". En esta vertiente habría que inscribir las presiones del Departamento de Estado para que algunos países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, confieran patente de corso frente a la Corte Penal Internacional a tropas y

funcionarios estadounidenses por crímenes de guerra que pudieran cometer en estos territorios.

- René Báez Tobar, Facultad de Economía de la PUCE

ALCA-Ecuador: la dialéctica del tiburón y las sardinas

René Báez

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es una estrategia de la Casa Blanca que, entre otras metas, busca paliar el empantanamiento de la economía de Estados Unidos y específicamente el deterioro de su balanza comercial, derivado de su pérdida de competitividad frente a la Unión Europea y Japón, mediante un operativo "anexionista" enfocado en contra de nuestras naciones. La estrategia de marras, eje de la política hemisférica de George W. Bush, ha encontrado una calurosa acogida de la mayoría de gobiernos latinoamericanos y especialmente del régimen de Gustavo Noboa Bejarano.

¿Cómo explicar la ansiedad de Noboa por ese asimétrico proyecto? Más allá de identificables expectativas de nuestro sector primario exportador –siempre existe la promesa del plato de lentejas–, la posición de Carondelet se explica por la proverbial miopía y candorosidad de la diplomacia ecuatoriana que, para instrumentar las directrices de Washington, sustituyó a un ministro e incluso amenazó a sus socios de la Comunidad Andina de Naciones con el retiro del país del organismo subregional. Visión y práctica equivocadas que acaban de desembocar en un nuevo episodio de vergüenza. ¿A qué aludimos concretamente? A que el gobierno nacional nunca comprendió que el ALCA representa sobre todas las cosas un proyecto del Estado norteamericano para extrapolar sus leyes y un instrumento al servicio de sus corporaciones transnacionales para consolidar su hegemonía comercial, financiera y tecnológica en el subcontinente. Dentro de estas coordenadas se tiene que entender la reciente decisión de la administración republicana de excluir al país de los beneficios comerciales que otorga la Ley de Promoción Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés) que acaba de entrar en vigencia incluyendo a la Colombia de Uribe, al Perú de Toledo y a la Bolivia de Sánchez de Lozada, es decir, a gobiernos de idéntico signo ideológico-político del ecuatoriano. ¿Por qué la Casa Blanca no actuó con el mismo rasero en el caso del Ecuador, país que, entre otros méritos, le ha entregado gratuita e ingenuamente un "portaaviones en tierra" para su campaña contra el narcotráfico?

Business are business. Conforme a una nota de prensa, las presiones de algunas corporaciones estadounidenses que operan en nuestro medio explicarían el discrimen. El propio canciller Moeller ha admitido ese influjo al declarar que "la elegibilidad de Ecuador para las preferencias arancelarias se ha detenido porque no se ha resuelto la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compañías petroleras estadounidenses". (El Comercio, 26 de septiembre del 2002). Pero no habrían sido únicamente las petroleras. En un despacho internacional se lee: "Gustavo Lemos, presidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana, domiciliada en Miami, declaró que el caso del pescado grafica lo que ocurre: en nuestro país hay empresas con patente y capital estadounidense a las cuales no les interesa que el atún y sardina que producen empresas nacionales entren a EE. UU., porque este es su nicho. Es notorio que quien puede más es la capacidad de 'lobby' de las transnacionales del atún asentadas en California".

La lógica y los impactos desigualitarios del ALCA han comenzado a emerger incluso antes de la vigencia plena de esa integración-desintegradora.

- * René Báez, profesor de la Facultad de Economía de la PUCE